GUINEA ECUATORIAL

Guinea Ecuatorial, con una población calculada en alrededor de un millón de habitantes, es nominalmente una república pluralista constitucional. Todos los poderes del Estado eran controlados por el Presidente, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, que ha gobernado desde que tomó el poder en un golpe militar en 1979, junto con su clan del grupo étnico mayoritario, los fang, y su partido político Partido Democrático de Guinea Ecuatorial (PDGE). El 29 de noviembre, el presidente Obiang fue reelecto con el 95,37 por ciento de los votos. Los resultados desiguales y la débil observación independiente del proceso electoral provocaron sospechas de un fraude sistemático en la votación. Observadores diplomáticos extranjeros notaron numerosas irregularidades y la presencia de personal militar en todas las mesas de votación. Si bien las autoridades civiles por lo general mantuvieron un control eficaz de las fuerzas de seguridad, hubo casos en que elementos de dichas fuerzas actuaron en forma independiente.

Se denunciaron los siguientes problemas en materia de derechos humanos: limitada capacidad de los ciudadanos de cambiar su Gobierno; ejecuciones ilegales por las fuerzas de seguridad; tortura de presos y detenidos por las fuerzas de seguridad; condiciones que constituían un peligro para la vida de los reclusos en las prisiones y centros de detención; impunidad oficial; arrestos, detenciones, y detenciones en régimen de aislamiento arbitrarios; hostigamiento y deportación de residentes extranjeros con limitadas garantías procesales; corrupción judicial y falta de garantías procesales; restricciones del derecho a la intimidad; restricciones de la libertad de expresión y de prensa; restricciones de los derechos de reunión, asociación y libre circulación; corrupción gubernamental; violencia y discriminación contra la mujer; sospecha de trata de seres humanos; discriminación contra minorías étnicas; y restricciones de los derechos laborales.

Tras un ataque armado el 17 de febrero al palacio presidencial, que posteriormente se adjudicó a un grupo de rebeldes nigerianos, el Gobierno hizo una redada, arrestó arbitrariamente sin orden de arresto y mantuvo detenidas sin formular cargos a numerosas personas, una de las cuales falleció por la golpiza recibida durante el interrogatorio y dos de las cuales fueron torturadas.

EL RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS

Sección 1. El respeto de la integridad de la persona, incluido el derecho a:

- a. No ser privado de la vida de manera arbitraria o ilícita

No se recibieron informes de asesinatos cometidos por agentes del Gobierno por motivos políticos; no obstante, las fuerzas de seguridad fueron responsables de muertes arbitrarias o ilícitas durante el año.

El 17 de febrero, se detuvo a ocho pescadores nigerianos para interrogarlos sobre un asalto armado al Palacio Presidencial de Malabo ese mismo día. Los oficiales de seguridad detuvieron también a Afiong Etim, la esposa de uno de los pescadores, que posteriormente falleció por la golpiza recibida durante el interrogatorio. Los ocho pescadores estaban detenidos en la cárcel de “Black Beach” esperando el juicio a fines de año. Dos de los 10 ecuatoguineanos arrestados

también en relación con el ataque estaban detenidos en la cárcel de “Black Beach” esperando el juicio a fines de año; los otros ocho fueron puestos en libertad bajo fianza.

El 15 de septiembre, cuatro agentes de policía que no estaban de servicio mataron a golpes a Akeem Jimoh, un residente legal nigeriano que, según se informa, se había negado a pagar un soborno. Jimoh, que iba camino a su casa del trabajo, fue detenido por tres policías que le pidieron los documentos de identidad. Jimoh llamó por teléfono a un amigo para que le llevara los documentos y posteriormente los presentó a la policía, que empezó a lanzarle improperios y le exigió un soborno de 50.000 francos CFA (US\$115). Después de que su amigo se fuera, se halló el cuerpo de Jimoh en las cercanías del centro de Malabo con una grave contusión en la cabeza. Funcionarios públicos afirmaron que no se presentó ningún testigo para corroborar la golpiza pero reconocieron que los agentes habían tratado de extorsionar a un residente legal. Los cuatro agentes, que afirmaron que se había encontrado a Jimoh inconsciente en otro lugar después de huir corriendo de la policía, fueron suspendidos del servicio y a fines de año aún esperaban los resultados de la investigación.

No hubo más novedades en los siguientes asesinatos cometidos por las fuerzas de seguridad en 2008: el asesinato por la policía de un presunto inmigrante ilegal; la muerte en marzo de Ncogo Mbomio, mientras se hallaba detenido, miembro de un partido político proscrito, cuya muerte Amnistía Internacional (AI) afirmó fue consecuencia de torturas; el asesinato en mayo por la policía de un ciudadano malí; y el asesinato en diciembre de un pescador camerunés.

No se disponía de más información sobre la muerte por tortura en 2007 de Salvador Ndong Nguema, miembro del partido opositor Convergencia por la Democracia Social (CPDS); los dos miembros de las fuerzas de seguridad detenidos en relación con el asesinato fueron puestos en libertad y se los reasignó.

Desapariciones

No se recibieron informes de desapariciones por motivos políticos durante el año.

El ex coronel del ejército Cipriano Nguema Mba, que fuera secuestrado del Camerún en octubre de 2008 y trasladado secretamente a la cárcel de “Black Beach” en Malabo, permanecía detenido a fines de año (véase la sección 1.e.).

Fuentes del Gobierno confirmaron que Florencio Ela Bibang, Antimo Edu Nchama y Felipe Esono Ntutumu estaban detenidos en la cárcel de “Black Beach” hacia fines de año (véase la sección 1.e.). Todos ellos fueron secuestrados en 2005 de otros países donde tenían condición de refugiados.

Tortura y otras formas de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes

La ley prohíbe dichas prácticas; no obstante, durante el año agentes de seguridad infligieron malos tratos y torturas a personas. AI informó el 28 de mayo que "presuntos delincuentes seguían siendo torturados o sometidos a malos tratos con impunidad en las comisarías". En septiembre de 2008, un funcionario público le dijo a un diplomático extranjero que a pesar de los

intentos por parte de un centro de derechos humanos del Gobierno de vigilar los centros de detención, las golpizas en las cárceles de todo el país eran un hecho común debido a la falta de capacitación y voluntad política para abordar el problema.

Después de su misión de noviembre de 2008 al país para evaluar el uso de la tortura en el régimen penal, Manfred Nowak, Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, afirmó que la policía recurría al "uso sistemático de la tortura" contra los detenidos, incluidos los presos políticos y los sospechosos de delitos comunes. Nowak, que vio una cámara de tortura completamente equipada en el sótano de la comisaría central de policía de Bata, documentó un caso de malos tratos de la policía, corroborado por un experto médico, que incluía palizas en las plantas de los pies y en los glúteos con porras de policía, cables sólidos forrados de goma y barras de madera; descargas eléctricas con cargadores de baterías o baterías de vehículos con cables prendidos a distintas partes del cuerpo con pinzas metálicas; y diversas formas de suspensión con las manos y los pies atados durante prolongados períodos de tiempo, mientras agentes de seguridad golpeaban a las víctimas cuando se balanceaban de un lado a otro.

Nowak subrayó el trato inhumano de los presos políticos en la cárcel de "Black Beach", donde informó que habían permanecido incomunicados hasta cuatro años, sin que se les permitiera una hora de ejercicio físico diario, como lo requieren las normas internacionales mínimas. Los presos políticos por lo general tenían grilletes en los pies durante la mayor parte del tiempo que permanecían en prisión. La misión de las Naciones Unidas dirigida por Nowak también constató que los inmigrantes corrían un riesgo cada vez mayor de sufrir malos tratos físicos en los calabozos de la policía.

Después de un ataque armado en febrero al palacio presidencial, el Gobierno hizo una redada, arrestó arbitrariamente sin orden de arresto y mantuvo detenidos sin formular cargos a 10 miembros de la Unión Popular (UP), de los cuales al menos dos fueron torturados. Posteriormente, ocho de ellos fueron puestos en libertad, pero dos permanecieron detenidos en la cárcel de "Black Beach" y a fines de año seguían esperando el juicio.

Los extranjeros, en su mayoría inmigrantes ilegales de otros países africanos, eran acosados, intimidados, arrestados y detenidos arbitrariamente (véase la sección 1.d.). Los diplomáticos extranjeros, en su mayoría de países africanos, también se quejaban de que la policía los acosaba, los sometía a malos tratos y los agredía, y también a sus familiares, aun después de que las víctimas mostraran sus documentos diplomáticos. En un caso, un diplomático extranjero informó que cuando fue en ayuda de su esposa, a quien la policía estaba arrestando, le dieron una paliza con la culata de un rifle. A fines de año, el Gobierno no había respondido aún a las protestas formales contra estos incidentes presentadas por los diplomáticos extranjeros.

No se tomaron medidas durante el año contra agentes de la comisaría central de policía de Malabo que en 2008 supuestamente habrían golpeado al menos a dos ex miembros del proscrito partido de la oposición Partido del Progreso de Guinea Ecuatorial (PPGE) para forzarles a hacer confesiones.

Según funcionarios del Estado y una empresa extranjera privada que trabaja en estrecho contacto con los militares en programas de adiestramiento, durante el año, un tribunal militar condenó al

menos a un miembro de las fuerzas de seguridad en relación con la tortura de Jaime Ndong Edu, miembro del CPDS, a manos del subcomisario de policía Donato Abogo Menden, en 2007.

Durante el año, se despidió a los 12 agentes de policía suspendidos a raíz de su participación en la agresión y saqueo de inmigrantes cameruneses después de un robo a un banco de Bata en 2007. En 2007, fuerzas de seguridad y ciudadanos atacaron a unos 8.000 inmigrantes cameruneses y saquearon sus propiedades; centenares de ellos se refugiaron en la embajada del Camerún en Malabo y el consulado en Bata. El Gobierno del Camerún se vio obligado a repatriar por avión a varios de sus ciudadanos. Hacia fines de año, el Gobierno no había respondido aún a los pedidos de compensación financiera presentados por los ciudadanos cameruneses afectados por el saqueo.

c. Condiciones de las prisiones y los centros de detención

Las cárceles no satisfacían las normas internacionales, si bien se hicieron algunas mejoras durante el año. Después de su misión de noviembre de 2008 al país para evaluar el uso de la tortura en el régimen penal, Manfred Nowak, Relator especial de las Naciones Unidas sobre la tortura, señaló el uso prolongado de celdas de aislamiento, la insuficiencia de alimentos y las malas condiciones sanitarias.

Con excepción de las cárceles recientemente renovadas en Bata y Malabo, las condiciones en los calabozos de la policía y otros centros de detención eran duras y a veces ponían en peligro la vida. Las celdas estaban abarrotadas y sucias, y los detenidos muy rara vez recibían atención médica, hacían ejercicio o disponían de colchones. Enfermedades tales como la malaria y el VIH/SIDA eran graves problemas. La comida solía ser facilitada por la familia de los detenidos o por otros detenidos y el acceso a agua potable estaba seriamente restringido. La mayor parte de los detenidos no tenía acceso a los aseos y recurría, en cambio, a botellas o bolsas de plástico.

Los inmigrantes ilegales detenidos en espera de ser deportados permanecían en el calabozo de la policía sin comida ni agua durante largo tiempo ya que la mayoría no tenía familia en las cercanías. En febrero de 2008, el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria, que visitó el país en 2007, expresó su preocupación por la prolongada duración de la detención arbitraria de los inmigrantes ilegales y recomendó que el Gobierno desplegara sus mejores esfuerzos para asegurar que los extranjeros tuvieran acceso a funcionarios consulares y se establecieran límites máximos razonables de detención; no obstante, las embajadas extranjeras informaron que las condiciones para los detenidos ilegales siguieron siendo las mismas durante el año.

A diferencia del año anterior, las reclusas por lo general estaban separadas de los varones adultos presos, y los menores generalmente estaban separados de los adultos; no obstante, había excepciones. Por ejemplo, en abril, una mujer extranjera en la cárcel de Bata afirmó que se la tenía detenida junto con varones adultos presos, reclusas y menores reclusos. Los reclusos en prisión preventiva estaban juntos con los condenados.

Ni la judicatura ni la policía tenían un sistema adecuado y eficaz de registro de casos o seguimiento de presos.

El Gobierno a veces permitía la observación independiente de las condiciones existentes en las tres prisiones, las 12 cárceles y numerosas celdas de detención del país en localidades más pequeñas. Según funcionarios públicos, se celebraron reuniones durante el año con representantes del Comité Internacional de la Cruz Roja de las Naciones Unidas (CICR) para tratar la reapertura de una oficina del CICR en el país. No obstante, las autoridades impidieron regularmente la observación de determinadas partes de las prisiones y otros centros de detención, en particular los centros de detención militares.

Funcionarios públicos confirmaron que se permitió a dos funcionarios del CICR visitar la cárcel de “Black Beach” de Malabo el 18 y 19 de junio; el CICR cerró su oficina de Bata y suspendió dichas visitas en marzo de 2008 después de que el Gobierno se negara a permitir el acceso a algunos reclusos.

En noviembre de 2008, las autoridades públicas negaron al equipo del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Tortura acceso a centros militares de detención en los campamentos militares de Cogo y Ela, con lo que impidieron efectivamente la investigación de las acusaciones de tortura y detenciones secretas; también se negó el acceso de seguimiento a las comisarías centrales de policía de Malabo y Bata. Según Nowak, durante la misión de observación de las Naciones Unidas, miembros de las fuerzas de seguridad amenazaron e intimidaron a los funcionarios de observación de las Naciones Unidas, a punta de pistola, para impedirles su intento de acceder a los centros de detención. En una carta del 22 de enero en respuesta a las acusaciones de Nowak, el Gobierno lamentó la falta de cooperación que había demostrado a Nowak durante su visita.

Durante el año, el Gobierno tomó medidas para mejorar las condiciones en las cárceles. A raíz de las renovaciones completadas en julio, las celdas de los reclusos y el patio de ejercicios en la cárcel de la ciudad de Malabo –que fuera objeto de las críticas de Nowak– eran más grandes y mejor ventilados. El Gobierno también colgó carteles con mensajes antitortura en aeropuertos y cruces fronterizos. El Ministro de Seguridad Nacional, Obama Schama, también se reunió con todos los comisionados de policía para poner de relieve la ilegalidad de maltratar a los reclusos.

d. Arresto o detención arbitrarios

El arresto y la detención arbitrarios están prohibidos por ley; no obstante, las fuerzas de seguridad con frecuencia efectuaron arrestos o detenciones arbitrariamente y sin las debidas garantías procesales. Un informe de febrero de 2008 del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria expresó su preocupación por el hecho de que la policía y los gendarmes con frecuencia ordenaban arrestos y detenciones sin contar con la debida autorización legal. Se dice que ocurrían detenciones secretas.

El papel de la policía y el aparato de seguridad.

En general, la seguridad corre a cargo de la policía en las ciudades, y de la gendarmería fuera de ellas y en ocasiones especiales. Ambas están bajo la jurisdicción del ministro de Seguridad Nacional. El personal militar también desempeña funciones policiales en zonas fronterizas y de mucho tráfico así como en sitios neurálgicos. Ese personal está bajo la jurisdicción del ministro

de Defensa. Además, había elementos de la policía asignados a los Ministerios del Interior (policía de fronteras y de tráfico), Hacienda (policía de aduanas) y Justicia (policía judicial y de investigación). Los agentes encargados de la seguridad presidencial también ejercían funciones policiales en la vecindad del Presidente e instalaciones presidenciales. Los contratistas extranjeros continuaron trabajando con el Gobierno para consolidar y organizar las estructuras de seguridad en el interior del país.

La policía continuó sufriendo los efectos de su carencia de fondos y formación deficiente y la corrupción e impunidad eran un problema, si bien en menor grado que en años anteriores. Las fuerzas de seguridad continuaron extorsionando a los ciudadanos e inmigrantes, aunque el número de tales incidentes disminuyó considerablemente durante el año. No se practicaron investigaciones internas en la policía, y los mecanismos de investigación de las acusaciones de malos tratos eran muy deficientes.

El Gobierno reconoció la necesidad de mejorar la profesionalidad de la policía y siguió apoyando un amplio programa de formación. Un contratista extranjero continuó adiestrando a los agentes de policía y a sus superiores en derechos humanos, prevención de la trata de seres humanos, el estado de derecho, el uso apropiado de la fuerza y un código de ética profesional. Las pruebas y la información aportadas por expatriados, ciudadanos y dirigentes comunitarios apuntaban a una mejora del desempeño en materia de derechos humanos y conducta profesional, en particular de los agentes jóvenes que recibían capacitación.

Procedimientos de arresto y tratamiento durante el período de detención

La Constitución exige la emisión de órdenes de arresto, salvo en casos en los que el sospechoso sea atrapado cometiendo un delito. A diferencia de años anteriores, no hubo denuncias de que algunas personas fueran detenidas por orden verbal de los agentes. Un detenido tiene el derecho a que un juez resuelva sobre la legalidad de la detención en un plazo de 72 horas a partir del arresto, excepto en fines de semana y días feriados; no obstante, la duración de dichas detenciones solía ser más larga, a veces de varios meses. La ley dispone que los detenidos sean informados inmediatamente de los cargos en su contra; no obstante, las autoridades no respetaban este derecho en la práctica. Algunos detenidos extranjeros se quejaron de que se los detuvo y luego se los deportó sin que estos supieran cuáles eran los cargos en su contra. Aunque existen servicios de caución y de asistencia letrada gratuita facilitada por el Colegio de Abogados, que recibe fondos del Gobierno, de los que es posible beneficiarse previa solicitud, o bien eran desconocidos de la mayor parte del público o no funcionaban eficazmente.

La ley dispone visitas de familiares y prohíbe la detención incomunicada; no obstante, el uso de este tipo de detención y la denegación de visitas de familiares eran graves problemas (véase la sección 1.c.). De acuerdo con el informe publicado en febrero por el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria, los abogados no tenían acceso a las comisarías y no podían ponerse en contacto con los detenidos mientras permanecían en ellas; los comisarios entrevistados por el Grupo de Trabajo declararon que no veían la necesidad o la conveniencia de dicho acceso.

La policía realizaba redadas periódicas en los guetos de inmigrantes, tiendas locales y restaurantes para arrestar inmigrantes ilegales; no obstante, según fuentes fiables, los inmigrantes, tanto legales como ilegales, eran objeto de abusos, extorsiones o se los detenía durante esas redadas. A menudo, la policía hacía uso excesivo de la fuerza para detener y deportar a los detenidos, y casi todas las embajadas extranjeras en el país criticaron al Gobierno durante el año por su hostigamiento, abuso, extorsión y detención sin representación de ciudadanos extranjeros. Muchos detenidos se quejaron de los sobornos que se les exigían para ponerlos en libertad.

Durante el año, el Gobierno arrestó arbitrariamente a un periodista (véase la sección 2.a.).

La prolongada duración de la detención preventiva siguió siendo problemática, y un número considerable de reclusos estaba en dicho régimen; no obstante, el número de dichos reclusos se desconoce debido al deficiente mantenimiento de registros. La ineficacia de las diligencias judiciales, la corrupción, la falta de vigilancia, y la insuficiencia de personal contribuyeron al problema.

El 3 de noviembre, el Presidente concedió el perdón a Simón Mann (véase la sección 1.e.).

e. Denegación de juicio público justo

La constitución y las leyes prevén la independencia del poder judicial; no obstante, el Gobierno no respetaba esta disposición en la práctica, y el poder judicial no era independiente, según los funcionarios de las Naciones Unidas y defensores locales e internacionales de los derechos humanos. Los jueces ejercen sus funciones a discreción del Presidente y son designados, trasladados y cesados en el cargo tanto por motivos políticos como por incompetencia. Circularon numerosos informes de corrupción judicial, y los casos se decidían a veces por motivos políticos.

El régimen judicial está integrado por los juzgados provinciales de primera instancia, dos tribunales de apelación, un tribunal militar y la Corte Suprema de Justicia. El Presidente nombra a los miembros de la Corte Suprema de Justicia que, según se informa, seguían sus instrucciones. El Consejo Supremo del Poder Judicial nombra y controla a los jueces. El presidente Obiang es presidente del Consejo Supremo y el presidente de la Corte Suprema es vicepresidente del Consejo Supremo.

El régimen de justicia militar no otorgaba a los acusados los mismos derechos que los tribunales civiles de justicia. El código de justicia militar dispone que todo el que desobedece a una autoridad militar, o presuntamente haya cometido un delito considerado "delito contra el Estado", será juzgado por un tribunal militar, con limitadas salvaguardas y garantías procesales, independientemente de la condición civil o militar del acusado. Un acusado puede ser juzgado en ausencia, y la defensa no tiene un derecho garantizado a contrainterrogar al demandante. Estas diligencias no son públicas y los acusados no tienen derecho de apelación a un tribunal superior. Según el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria, "los jueces y los defensores en los tribunales militares no son abogados ni juristas, sino oficiales militares sin formación jurídica".

Los ancianos tribales emitieron fallos en causas civiles y asuntos penales de menor importancia, en tribunales tradicionales de las zonas rurales. Estos fallos se emitieron con arreglo a la tradición y sin tener en cuenta los mismos derechos y privilegios que prevé el régimen de justicia formal. Quienes no estuvieran satisfechos con los juicios tradicionales podían apelar a los tribunales civiles.

Procedimientos judiciales

Por ley, todo acusado tiene derecho a la presunción de inocencia mientras no se demuestre su culpabilidad. Muchos juicios por delitos ordinarios son públicos, pero rara vez se utilizaba el jurado. Los acusados tienen derecho a estar presentes en su juicio, pero rara vez podían consultar con prontitud con su abogado, a menos que pudieran pagar los honorarios de un abogado particular. Un acusado que no pueda sufragar la asistencia letrada puede solicitar al Gobierno que le asigne un defensor de oficio, pero sólo si se requiere la comparecencia del acusado ante el tribunal, y a los acusados no se les informaba automáticamente de este derecho. El colegio de abogados del país estuvo disponible para defender a clientes indigentes; no obstante, perduraron la grave carestía de abogados y la falta de un sistema efectivo de representación de oficio nombrada por el tribunal. La ley dispone que los acusados puedan interrogar y contrainterrogar a los testigos y presentar sus propios testigos y pruebas; no obstante, este derecho rara vez se hacía valer en la práctica. Por disposición legal, el acusado tiene derecho a apelar; no obstante, no se solía recurrir a la apelación legal debido a la falta de una adecuada representación legal y al desconocimiento de los derechos constitucionales.

Presos y detenidos políticos

Fue difícil calcular el número de personas detenidas o presas por ejercer sus derechos políticos, en parte porque las autoridades no mantenían registros fiables de las cárceles y prisiones, ni permitían la observación independiente de los centros de detención.

A fines de 2008, 39 personas fueron encarceladas por delitos relacionados con el ejercicio de derechos políticos; todas eran miembros de partidos de la oposición, principalmente partidos proscritos, o personas a las que el Gobierno acusó de participar en presuntos intentos de golpe. De los condenados, la mayoría estaban acusados de "delitos contra el Estado". Algunos fueron condenados por tribunales militares sin respeto de las garantías procesales y otros fueron juzgados sumariamente sin derecho a apelar sus sentencias, según el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria.

Después del ataque del 17 de febrero al palacio presidencial en Malabo, 10 miembros del partido UP fueron arrestados y detenidos. Ocho de los 10 fueron puestos en libertad bajo fianza, pero a fines de año, los miembros del UP Marcelino Nguema y Santiago Asumu seguían en la cárcel de "Black Beach" a la espera del juicio.

El ex coronel del ejército Cipriano Nguema Mba, que en octubre de 2008 fue secuestrado del Camerún donde fue reconocido como refugiado y trasladado secretamente a la cárcel de "Black Beach" en Malabo, aún seguía en prisión a fines de año. En un juicio militar en 2004, Nguema

fue condenado en ausencia por traición y sentenciado a 30 años de cárcel por tramar presuntamente un golpe y abandonar el país con fondos del Gobierno. Además, el Gobierno siguió deteniendo a otros presos políticos a los que agentes del Estado habían secuestrado de países vecinos en los últimos años, según el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria.

Dicho grupo recomendó en febrero de 2008 la adopción por el Gobierno de las medidas necesarias para poner fin inmediatamente a las detenciones secretas. Además de Juan Ondo Abaga, quien fuera puesto en libertad de la cárcel de “Black Beach” en junio de 2008, el grupo citó las continuas detenciones secretas de Florencio Ela Bibang, Felipe Esono Ntumu y Antimo Edu Nchama, y todos ellos fueron secuestrados en países extranjeros donde tenían condición de refugiados, torturados y condenados por traición en un tribunal militar. Se cree que Bibang, Ntumu y Nchama permanecían en la cárcel de “Black Beach”, donde se les denegó el acceso a abogados o a sus familiares.

En julio de 2008, un tribunal condenó y sentenció a seis años de privación de libertad a cinco antiguos miembros de un partido político proscrito, el PPGE —Cruz Obiang Ebele, Emiliano Esono Micha, Gerardo Angue Mangué, Gumersindo Ramírez Faustino y Juan Ecomo Ndong— a los que se acusó de pertenecer a un partido proscrito, convocación de reuniones ilegales, tentativa de derrocar al Gobierno y contrabando de armas. La policía arrestó arbitrariamente a los cinco individuos en marzo de 2008, junto con otro antiguo miembro del PPGE, Bonifacio Nguema Ndong, que fue absuelto por el tribunal después del hallazgo de armas en el maletero de un vehículo importado de España. Según AI, las autoridades arrestaron a los cinco hombres sin disponer de un mandamiento de arresto, los obligaron a firmar declaraciones que no habían hecho, golpearon al menos a dos de ellos, los mantuvieron incomunicados sin acceso a un abogado hasta cinco días antes del juicio, y no presentaron pruebas de que hubieran estado en posesión de las armas.

Los cinco hombres fueron declarados culpables en el mismo juicio que el de Simón Mann, aunque los cargos contra ellos no tenían relación con los hechos por los que se enjuiciaba a Mann. Mann, un ciudadano británico que se declaró culpable de tramar un golpe en 2004, recibió el perdón del Presidente el 2 de noviembre y fue puesto en libertad.

En febrero de 2008, el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria recomendó que el Gobierno elabore un nuevo código penal; establezca un poder judicial independiente; inste a jueces y funcionarios policiales a hacer visitas periódicas a las cárceles y centros de detención de la policía; limite la jurisdicción de los tribunales militares exclusivamente a los delitos militares cometidos por personal de las fuerzas armadas; extienda la capacitación en derechos humanos a jueces y funcionarios policiales de todos grados, miembros de las fuerzas de seguridad y de la Fiscalía General; asegure a los abogados el libre acceso a las comisarías y las prisiones; y garantice los recursos necesarios para asegurar el eficaz funcionamiento del régimen de administración de justicia así como del régimen carcelario y de detención policial. El Gobierno declaró que carecía de la capacidad interna para instituir tales cambios.

Procedimientos y recursos judiciales civiles

Las cuestiones civiles se pueden resolver fuera de los tribunales y, en algunos casos, los ancianos sabios de las tribus juzgan las disputas locales. Los juzgados se dedicaban cada vez más a fallar en casos civiles presentados ante ellos, algunos de los cuales tenían que ver con demandas de derechos humanos. Muchas compañías internacionales con intereses en el país tenían cláusulas de mediación que se activaban ocasionalmente. Las resoluciones resultantes se solían respetar.

- f. Injerencia arbitraria en la intimidad personal, la familia, la vivienda o la correspondencia

La Constitución y las leyes prohíben dichas acciones, pero, con frecuencia, el Gobierno no respetaba estas prohibiciones. Las fuerzas de seguridad allanaron viviendas y arrestaron a sospechosos de disidencia, delincuentes, ciudadanos extranjeros, y otros –a menudo sin órdenes judiciales, que algunos oficiales no necesitan para entrar y efectuar registros en las viviendas– y confiscaron sus bienes con impunidad.

Se notificó que informantes del Gobierno vigilaron a miembros de la oposición, organizaciones no gubernamentales (ONG) y periodistas. La mayoría de los residentes y de los periodistas creían que el Gobierno intervenía sus comunicaciones telefónicas.

La ley dispone la restitución o indemnización por la incautación de bienes privados; no obstante, en la práctica, cuando el Gobierno desalojó forzosamente a particulares de su hogar o sus tierras, a veces no proporcionó indemnización equitativa u otra vivienda. Los particulares pueden tener título de propiedad de parcelas, pero el Estado tiene plenos poderes de expropiación, que a menudo ejerció con el fin de fomentar el desarrollo. Durante el año, la regeneración de las ciudades principales continuó dando lugar a la expropiación forzosa. Muchas familias fueron desalojadas de sus hogares por la fuerza para permitir la construcción de caminos y complejos de viviendas de lujo, especialmente en Malabo y Bata. La Cruz Roja local, la Iglesia católica, abogados de derechos humanos y la oposición política expresaron preocupación por el desplazamiento de comunidades pobres.

Sección 2 El respeto de las libertades civiles, incluidas:

- a. Libertad de expresión y de prensa

La libertad de expresión y de prensa está amparada por la Constitución y las leyes; no obstante, la Ley de prensa, Publicaciones y Medios Audiovisuales otorga amplios poderes a las autoridades para restringir las actividades de los medios de información, y el Gobierno limitó estos derechos en la práctica.

Si bien se permitió la crítica de las políticas del Gobierno, los particulares no podían criticar al Presidente, su familia, otros altos funcionarios ni a las fuerzas de seguridad, sin temor a represalias, y según informes recibidos, el Gobierno trató de acallar las críticas mediante la continua vigilancia de las actividades de la oposición política, los periodistas y otros. Desde 2007, algunos periodistas han informado de temas anteriormente considerados intocables, incluso la moderada crítica de instituciones por falta de adelanto en cuestiones de desarrollo

económico e ineficiencia del Gobierno, pero los medios de información del país permanecieron débiles y bajo la influencia o control del Gobierno y los periodistas practicaron la autocensura.

Las publicaciones del Gobierno incluían *Ébano*, un periódico quincenal publicado por el Ministerio de Información, Turismo y Cultura, y el periódico mensual *La Gaceta de Guinea Ecuatorial*. Las publicaciones independientes incluían el periódico bimestral *El Correo*, periódicos de la oposición como *La Opinión* y *El Tiempo*, y publicaciones de propiedad privada como *El Sol*, *La Nación*, *Hola*, *Ceiba*, *El Ape*, *La Verdad* y *La Voz Del Pueblo*.

La publicación de un nuevo periódico o revista exige un complicado proceso, regulado por una ley ambigua y con frecuencia entorpecido por la burocracia oficial. Además, la acreditación está sujeta a numerosas trabas, tanto para los periodistas locales como los extranjeros, que tienen que inscribirse en el Ministerio de Información.

Sólo una de las agencias de noticias internacionales tenía en el país un corresponsal a tiempo parcial regular y, al parecer, agentes del Gobierno seguían y vigilaban a los representantes de los medios de información. Durante el año, algunos medios de información no pudieron ejercer libremente sus funciones en el país; el Gobierno negó el visado a periodistas españoles de importantes informativos antes de las elecciones presidenciales del 29 de noviembre (véase la sección 3). Los periódicos o las revistas internacionales no se vendían normalmente en los mercados rurales debido, al menos en parte, a su elevado precio y los bajos índices de alfabetización de las zonas rurales; no obstante, la venta de periódicos y revistas internacionales era cada vez más frecuente en varias tiendas de comestibles en Malabo y Bata.

El 17 de julio, la policía arrestó a Rodrigo Angue Nguema, el corresponsal en Malabo de la Agence France-Presse y Radio France Internationale, por difamación y por divulgar información falsa. Nguema había escrito un artículo en el cual acusaba a Mamadou Jaye, jefe ejecutivo de la línea aérea nacional Ceiba, de defraudar 3.500 millones de francos CFA (US\$7,64 millones) y de huir del país, acusación que posteriormente retiró después de enterarse de que su fuente le había proporcionado información falsa. A pesar de publicar una retractación, Nguema fue enjuiciado el 1 de septiembre por difamación; el 15 de octubre fue puesto en libertad después de cumplir una condena de casi cuatro meses en prisión. Jaye, el ejecutivo de la línea aérea que entabló juicio, demandó a Nguema por 5 millones de euros (US\$7,06 millones), la suma que supuestamente él había defraudado según el artículo de Nguema, acusación que este último finalmente retiró. Reporteros sin Fronteras (RSF) consideró que la detención fue un "castigo desmesurado" por difamación y pidió que las autoridades reformaran las leyes para prevenir sentencias tan severas.

La ley otorga al Gobierno amplios poderes para restringir a la prensa mediante la censura oficial previa a la publicación. La ley establece asimismo sanciones penales, civiles y administrativas por infracción de sus disposiciones, en particular los "diecinueve principios de publicación" enunciados en el Artículo 2 de la Ley de Prensa, Publicaciones y Medios Audiovisuales.

Muchas de las trabas legales y administrativas señaladas por grupos internacionales defensores de la libertad de prensa continuaron presentando considerables dificultades a los medios de información del país. Por ejemplo, continuó la falta de inversión gubernamental adecuada en infraestructura, necesaria para el desarrollo de medios de información independientes fuertes,

como prensas y quioscos de venta de periódicos, y el Gobierno no mostró indicios de alentar, sobre una base no discriminatoria, los anuncios públicos en la prensa escrita. Durante 2008, un periodista, miembro de la Asociación Nacional de Prensa, equiparó esta falta de inversión gubernamental a "censura económica" y expresó profunda inquietud por la falta de oportunidades de formación de periodistas locales, pese al reciente y excepcional crecimiento económico del país.

El Gobierno era propietario de un sistema nacional de difusión de radio y televisión, RTVGE. El hijo mayor del Presidente era dueño del único medio de difusión privado. Las transmisiones por satélite eran cada vez más comunes.

Ante la falta de una radio o televisión independiente, la cobertura de la campaña presidencial para las elecciones del 29 de noviembre fue tendenciosa en gran medida. Observando el bajo nivel de atención que los medios estatales prestaban a las actividades de la oposición, los Reporteros Sin Fronteras afirmaron que el Presidente "posiblemente alcanzaría alrededor del 100 por ciento de los votos, que es prácticamente lo mismo que la cobertura que recibió de los medios". La emisora estatal de radio y televisión RTVGE no organizó ningún debate y cubrió sólo algunas actividades o reuniones de la oposición.

El 12 de enero, la viceministra de Información Purita Opo Berila anunció el despido de los periodistas David Ndong, Miguel Eson Ona, Cirilo Nsue y Casiano Ndong, que eran empleados de RTVGE, por "insubordinación" y "falta de entusiasmo". Citando fuentes locales, los Reporteros Sin Fronteras afirmaron que los despidos se debieron a que los cuatro periodistas no elogiaban los "méritos" del Gobierno. La organización observó que se esperaba que los empleados de los medios estatales transmitieran propaganda del Gobierno, que se los consideraba empleados estatales y no tenían protección legal ni representación sindical que defendiera sus acciones o los representara en un desacuerdo con el Gobierno.

La Iglesia católica solicitó establecer una emisora de radio en 2007, pero para fines de año el Gobierno no había otorgado aún su autorización.

Los canales extranjeros no estaban censurados, transmitían por todo el país y entre ellos estaba Radio France International, la BBC y Radio Exterior, el servicio internacional de onda corta de España.

Libertad de Internet

El Gobierno no restringió el acceso a Internet y no hubo denuncias de que éste controlara los mensajes electrónicos o las salas de charla de Internet. Las personas y los grupos podían expresar pacíficamente sus opiniones por Internet, incluso por el correo electrónico. La mayor parte de las críticas explícitas contra el Gobierno provenían de la comunidad en exilio e Internet había reemplazado a las emisoras de radiodifusión como medio principal de expresión y difusión de opiniones de oposición. No se bloquearon los sitios de los ciudadanos exiliados. Según las estadísticas de la Unión Internacional de Telecomunicaciones correspondientes a 2008, alrededor del 1,8 por ciento de los habitantes del país usaban Internet.

Libertad académica y acontecimientos culturales

La libertad académica y los acontecimientos culturales no fueron objeto de restricciones oficiales; no obstante, en años anteriores, algunos profesionales calificados perdieron su cargo docente a causa de su afiliación política o declaraciones críticas que fueron denunciadas a funcionarios públicos por los estudiantes que asistían a sus clases. Al parecer, la mayor parte de los profesores practicaba la autocensura para evitar problemas. Los acontecimientos culturales requerían coordinación con el Ministerio de Información, Cultura y Turismo.

Los miembros de los partidos políticos de la oposición y del cuerpo docente universitario se quejaban de la injerencia del Gobierno en la contratación de profesores, el continuo empleo de docentes no titulados y la presión de aprobar a estudiantes reprobados que tenían conexiones. Se contrataba a docentes con conexiones políticas pero sin experiencia o acreditación, aun cuando rara vez se presentaran en las clases que supuestamente impartían. No existía un sindicato de docentes que defendiera sus derechos y los puestos docentes sólo estaban disponibles a los miembros del PDGE.

b. Libertad de reunión y asociación pacíficas

Libertad de reunión

El derecho de reunión está amparado por la Constitución y las leyes; no obstante, el Gobierno restringió ese derecho, principalmente mediante la imposición de límites a la libertad de asociación, lo que dificultó a las organizaciones que no disponían de autorización legal funcionar y celebrar reuniones legalmente. Aunque el Gobierno abolió oficialmente el requisito de solicitar permiso para las reuniones de partidos políticos celebradas en los edificios mismos del partido, se esperaba de los partidos políticos que informasen a las autoridades si deseaban celebrar reuniones fuera de su sede. El Gobierno exigía notificación de la celebración de acontecimientos públicos tales como reuniones o marchas. Según donantes extranjeros y miembros de los grupos locales de las sociedades civiles, en virtud de los intentos de golpe en los últimos años, el Gobierno continuaba considerando algunas reuniones informales de las asociaciones como amenazas para la seguridad.

Los oficiales locales impidieron los intentos de la oposición de hacer campañas en regiones leales al Presidente (véase la sección 3).

Libertad de asociación

La libertad de asociación está amparada por la Constitución y las leyes, sin embargo el Gobierno restringió considerablemente este derecho en la práctica. Todos los partidos políticos, sindicatos laborales y otras asociaciones tienen que registrarse con el Gobierno. Hasta la fecha, sólo se ha registrado una organización laboral. La ley prohíbe el establecimiento de partidos políticos con arreglo a afiliaciones étnicas, y varios partidos políticos seguían proscritos (véase la sección 3). El procedimiento de registro de las ONG era costoso, oneroso, poco claro y, a veces, duraba años (véase la sección 4). Durante el año, los donantes extranjeros continuaron instando al Gobierno a revisar y reformar el régimen jurídico que regula el establecimiento de las ONG. Muchas

asociaciones, incluidas varias agrupaciones de mujeres que trabajan en pro del desarrollo económico, no consiguieron registrarse ni obtener la autorización del Gobierno.

c. Libertad de culto

La libertad de culto está amparada por la Constitución y las leyes, y el Gobierno generalmente respetó ese derecho. No se recibieron informes de que el Gobierno vigilara las ceremonias religiosas.

La Iglesia católica y la Iglesia Reformada de Guinea Ecuatorial tienen preferencia ante la ley, en consideración a sus raíces tradicionales e influencia histórica en la vida social y cultural. Una misa católica romana es normalmente parte de toda festividad o función oficial solemne. Las escuelas católicas establecidas desde hace tiempo recibían los mismos beneficios del Estado que las escuelas públicas.

Las organizaciones religiosas tienen que registrarse oficialmente en el Ministerio de Justicia, Religión e Instituciones Penales para poder llevar a cabo su cometido. La aprobación puede tardar varios años, más a causa de la lentitud burocrática que a políticas; no obstante, la falta de procedimientos de registro claramente definidos seguía siendo un problema.

Las clases de religión eran opcionales en las escuelas públicas, pero obligatorias en las escuelas parroquiales y solían ser, aunque no siempre, católicas.

Abusos sociales y discriminación

La comunidad judía era extremadamente pequeña; no se tuvo noticia de actos antisemitas.

Para más detalles, véase el *2009 International Religious Freedom Report* en el sitio web www.state.gov/g/drl/rls/irf.

d. Libertad de circulación, personas desplazadas internamente, protección de los refugiados, y apátridas

La ley prevé la libertad de circular libremente dentro del país, viajar al extranjero, emigrar y repatriarse. No obstante, el Gobierno restringió estos derechos en la práctica.

Durante el año no hubo casos en los que el Gobierno cooperara con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, que no tenía una oficina local, ni con otras organizaciones humanitarias en ayudar a refugiados y solicitantes de asilo.

La policía, en controles de carretera, controló regularmente a los viajeros y, en ocasiones, recurrió a la extorsión de poca monta, si bien las denuncias de tales prácticas disminuyeron durante el año. Los observadores atribuyeron la disminución a una mayor capacitación y a la contratación de oficiales más jóvenes y mejor instruidos. Con frecuencia también se hacían redadas de inmigrantes ilegales en los controles de carretera. El Gobierno justificó los controles de carretera como medio de impedir la inmigración ilegal, las actividades de mercenarios y las

tentativas de golpe. Estos controles también restringieron la libertad de circulación de los viajeros.

La ley prohíbe el exilio forzoso interno o externo; sin embargo, el Gobierno no respetó esta prohibición en la práctica. A raíz del indulto de presos políticos en junio de 2008, el Gobierno exigió a varios de ellos regresar a sus aldeas de origen y permanecer en ellas. Varios miembros de partidos políticos proscritos permanecieron en exilio voluntario.

Protección de los refugiados

El país forma parte de la Convención de 1951 de las Naciones Unidas sobre el Estatuto de los Refugiados y su protocolo de 1967, así como de la Convención de 1969 de la Unión Africana sobre Aspectos Específicos del Problema de los Refugiados en África; no obstante, el Gobierno no ha establecido un sistema para la protección de refugiados.

En la práctica, el Gobierno ofreció cierta protección contra la expulsión o la devolución de personas a países donde su vida o su libertad estarían amenazadas. No obstante, se informó que en octubre de 2008, agentes de policía del Camerún arrestaron ilegalmente al ex coronel del ejército de Guinea Ecuatorial Cipriano Nguema Mba, en Camerún, donde tenía condición de refugiado, y lo entregaron a la embajada del país en Camerún, desde donde lo trasladaron clandestinamente a la cárcel de “Black Beach” (véase la sección 1.e.).

El Gobierno ofreció protección humanitaria temporal a individuos que pudieran no reunir los requisitos de condición de refugiado con arreglo a la Convención de 1951 y su protocolo de 1967.

Sección 3. Respeto de los derechos políticos: El derecho de los ciudadanos a cambiar de Gobierno

El derecho de los ciudadanos a cambiar de Gobierno por medios pacíficos está amparado por la Constitución y las leyes; no obstante, pese a las mejoras observadas durante el año en el proceso político, este derecho siguió siendo limitado, en parte como resultado del dominio ejercido por el partido gobernante PDGE.

Elecciones y participación política

El 29 de noviembre, el presidente Obiang fue reelecto, obteniendo el 95,37 por ciento de los votos; el candidato de la oposición Plácido Mico del CPDS obtuvo el 3,55 por ciento. Los resultados desiguales y la débil observación independiente del proceso electoral provocaron sospechas de un fraude sistemático en la votación. Fueron pocos los observadores internacionales del proceso electoral que controlaron las 1.289 mesas de votación a raíz de la insistencia del Gobierno en coordinar su movimiento, la prohibición a las críticas y el control del acceso de los medios de difusión. Entre las irregularidades del proceso electoral en algunas mesas de votación se incluyeron votos múltiples, la violación del carácter secreto del voto y la falta de una lista publicada de candidatos empadronados. En algunas mesas de votación, se

permitía a los votantes votar en lugar de familiares y votar aunque no estuvieran empadronados, y las urnas no estaban selladas. Se desplegaron soldados en todas las mesas de votación.

El 16 de octubre, el presidente Obiang anunció que las elecciones se celebrarían el 29 de noviembre, y la campaña comenzaría oficialmente el 5 de noviembre; según la Constitución, las elecciones presidenciales deben convocarse como mínimo 45 días antes de finalizar el mandato del Presidente de 30 días a partir de entonces. Según Human Rights Watch, el apretado calendario electoral y la negativa del Gobierno a hacer públicas las listas de votantes limitaron seriamente la capacidad de la oposición para hacer su campaña y obtener apoyo. El proceso de empadronamiento de votantes, una parte importante de los preparativos para las elecciones en el país, tenía serias fallas. El comité de empadronamiento estaba compuesto principalmente por miembros del PDGE y por lo general decidía los asuntos a favor de éste. Al empadronar a un miembro del PDGE, el comité empadronaba a todos los integrantes de la familia como votantes del PDGE, incluso a menores. Personas muertas, menores de edad o residentes en el extranjero eran incluidos como empadronados del PDGE.

No existía un cuerpo independiente e imparcial que supervisara el proceso electoral o tomara en cuenta las quejas relacionadas con las elecciones. La Comisión Electoral Nacional, que no formaba parte del comité de empadronamiento de votantes y se encargaba de garantizar la imparcialidad de las elecciones y de manejar las quejas formales después de las mismas, era controlada por el partido gobernante y estaba encabezada por el Ministro del Interior, miembro prominente del partido. Aunque entre sus integrantes figuraba un representante de cada partido político que presentaba candidatos, también incluía representantes del Gobierno, carecía de representación de la sociedad civil, y la mayoría de sus miembros eran funcionarios pertenecientes al partido gobernante. El partido CPSD de la oposición denunció que uno de sus oficiales electorales fue obligado a aprobar un recuento de votos a punta de pistola en la cabeza.

Los miembros y candidatos de partidos de la oposición estaban en clara desventaja en sus actividades para atraer a los votantes. En conjunto, los partidos de la oposición y sus candidatos estaban mal organizados, deficientemente financiados y carecían de apoyo popular. Debido a la cuasiobligatoria recaudación de cuotas y otras contribuciones, los fondos de que disponía el partido gobernante eran de una magnitud completamente desproporcionada, incluso para regalos a posibles votantes. Varios partidos políticos proscritos en los últimos años no pudieron participar en las elecciones. El Gobierno denegó a la oposición acceso equitativo a los medios de difusión. Los miembros y líderes de la oposición también denunciaron que el Gobierno vigilaba sus actividades.

A diferencia del año anterior, no se arrestó, detuvo ni torturó a los miembros de la oposición; no obstante, se hostigó e intimidó a los candidatos opositores durante la campaña presidencial.

Por ejemplo, el 14 de noviembre, un cura párroco en el poblado de Ayene impidió que el candidato del CPDS Plácido Mico celebrara un mitin en la plaza del pueblo delante de la iglesia porque, según el cura, la plaza era propiedad de la Iglesia. El jefe de policía del lugar intercedió en nombre del cura y ordenó al candidato y a sus partidarios que se retiraran de la plaza. Según se informa, el jefe de policía también ordenó a unos jóvenes del lugar que quitaran del propio

vehículo del partido unos carteles de la campaña y blandieron un arma al amenazar a Mico y sus partidarios. Oficiales del CPDS denunciaron que miembros del PDGE atacaron a sus miembros.

El 19 de noviembre, en el poblado de Aconibe, en Wele-Nzasla, provincia de origen del presidente Obiang, fuerzas de seguridad, miembros del PDGE y pobladores atacaron a partidarios del partido opositor UP y a su candidato presidencial Archivaldo Montero Biribe. Según se informó, oficiales de la policía les dijeron a los partidarios del UP que no podían congregarse en el pueblo porque todos sus habitantes apoyaban al presidente Obiang. El presidente del partido UP, Daniel Martínez, que solicitó la intervención del Ministro del Interior Clemente Nguema, denunció que se le dijo que "esto es África, ¿qué otra cosa podía esperar y qué espera que haga yo al respecto?" Después de recibir el mismo tratamiento en el poblado vecino de Nsork, los líderes del UP dejaron de hacer campaña en la provincia. Los líderes del CPDS y el Partido de Acción Popular denunciaron un tratamiento similar en la provincia, donde también dejaron de hacer campaña.

El partido PDGE gobernante ejercía su dominio por medio de un sistema complejo construido en torno a lealtades de familia, de clanes y de tipo étnico. Continuó la presión indirecta a los empleados públicos para que se unieran al PDGE. Los miembros de los partidos de la oposición siguieron denunciando que se les discriminaba en el empleo, la conservación de puestos de trabajo, becas y obtención de licencias comerciales. Durante el año, particulares arguyeron que la presión del Gobierno impedía a los miembros de la oposición obtener empleos con empresas extranjeras. Los miembros de partidos de la oposición afirmaron que si se descubría que una compañía tenía contratados a empleados con vínculos directos a familias, individuos, partidos o grupos que habían caído en desgracia con el Gobierno, a menudo se la obligaba a despedir a esos empleados o se exponía a ser recriminada.

Durante el año, al parecer el Gobierno advirtió a la esposa de un líder del partido de la oposición que se uniera al PDGE (supuestamente para poner al líder de la oposición en una situación embarazosa) o de lo contrario perdería su cargo. La esposa se negó a unirse al PDGE y fue despedida.

Los tres partidos legales de la oposición afrontaban restricciones a las libertades de expresión, de asociación y de reunión (véanse las secciones 2.a. y 2.b.). Algunos partidos políticos existentes antes de la ley de 1992 que establecía procedimientos para legalizar los partidos políticos siguieron proscritos, por lo general por "apoyar el terrorismo".

Durante el año, el CPDS declaró que no tenía planes de volver a abrir una radioemisora pero que se reservaba el derecho de hacerlo en el futuro. En agosto de 2008, después de informar al Gobierno por escrito de su intención de abrir una radioemisora, el partido de la oposición CPDS comenzó a probar sus equipos. Posteriormente, el Gobierno ordenó al CPDS que cesara las transmisiones, allanó la radioemisora e incautó materiales.

El Presidente, que puede ejercer un número ilimitado de mandatos de seis años, tenía imponentes poderes como jefe de Estado, comandante en jefe de las fuerzas armadas, jefe del poder judicial y fundador y jefe del partido gobernante. En general, los altos cargos del Gobierno estaban reservados para el partido del Presidente o la coalición de partidos de "oposición leal". A causa

del control férreo ejercido por el partido gobernante sobre las comisiones establecidas para examinar las prácticas electorales y recomendar reformas, se hicieron pocos cambios. El ministro del Interior fue elegido presidente de la Comisión electoral nacional.

El Gobierno no limitó abiertamente la participación de las minorías en la vida política; sin embargo, el grupo étnico predominante, los fang, al que se calcula que pertenece más del 85 por ciento de la población, continuó ejerciendo considerable poder económico y político.

Sección 4. Corrupción de los funcionarios públicos y transparencia del Gobierno

La legislación sanciona con graves penas la corrupción de los funcionarios públicos; no obstante, el Gobierno no aplicó dicha legislación de manera efectiva, y los funcionarios con frecuencia se dedicaron a prácticas corruptas con impunidad. La corrupción sigue siendo un grave problema. No hubo enjuiciamientos por casos de corrupción durante el año.

El Presidente y miembros de su círculo de asesores más allegados continuaron amasando enormes beneficios personales por las ganancias imprevistas que obtuvieron del petróleo. Según Human Rights Watch, Teodorin Obiang, hijo del Presidente, gastó más en artículos suntuarios durante 2004-2007 que el presupuesto de 2005 del Gobierno para educación; entre las compras se incluía una mansión de US\$35 millones, un jet de US\$37 millones, y automóviles de lujo por un valor de US\$2,6 millones como mínimo. El presidente Obiang adujo que la información sobre las utilidades por las explotaciones petrolíferas era un "secreto de Estado" y se resistió a los llamamientos de transparencia y rendición de cuentas. Según la ONG Global Witness, el Gobierno no ha revelado dónde se encuentran más de dos mil millones de dólares en fondos públicos.

En diciembre de 2008, grupos de activistas contra la corrupción, entre ellos la sección francesa de AI, entablaron juicio en París contra el presidente Obiang y otros dos jefes de Estado africanos a los que acusaron de adquirir casas lujosas en Francia con fondos públicos desfalcados. Los demandantes declararon que "no cabía ninguna duda de que estos bienes no podían haberse adquirido solamente con los sueldos y beneficios de estos jefes de Estado".

También en diciembre de 2008, un grupo español de derechos humanos presentó una denuncia oficial en España ante la fiscalía contra la corrupción, en la que alegaba que miembros de la familia del presidente Obiang y altos funcionarios políticos cercanos al Presidente habían desfalcado 12.700 millones de francos CFA (US\$27,73 millones) de una compañía estatal de petróleo para comprar casas en España, y que habían blanqueado esos fondos públicos entre 2000 y 2003 en bancos extranjeros. Los medios de información españoles publicaron que el fiscal de España contra la corrupción había iniciado la investigación de las acusaciones contra estos individuos para fines de año.

Por disposición legal, los funcionarios deben declarar sus bienes, si bien no se hicieron declaraciones públicas. No existía el requisito de que los funcionarios se despojaran de sus participaciones comerciales que estuvieran en posible conflicto con sus deberes oficiales ni tampoco una ley que prohibiera estos conflictos de intereses. La mayoría de los ministros siguió ejerciendo funciones múltiples y haciendo negocios que combinaban con sus deberes

gubernamentales. Por ejemplo, el Ministro de Justicia tenía su propio bufete privado de abogados y el Ministro de Transporte y Comunicaciones era director de la junta directiva y propietario de acciones en la aerolínea paraestatal y la compañía telefónica nacional.

La presidencia y la Oficina del Primer Ministro eran los organismos principales en las actividades de anticorrupción. Según se informó, varios ministros fueron sustituidos después de las elecciones de mayo de 2008 como consecuencia de prácticas corruptas.

Durante el año, el Gobierno hizo más progresos en pos de cumplir los objetivos requeridos para unirse a la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI), iniciativa de las sociedades civiles multinacionales para fomentar la transparencia y rendición de cuentas en las industrias extractivas mediante la formulación de un plan laboral aprobado y el logro de la condición de candidato. No obstante, el Gobierno aún afrontaba considerables dificultades para cumplir los requisitos de la EITI relativos al desarrollo de la sociedad civil y seguía existiendo la falta de transparencia en las industrias extractivas.

En octubre de 2008, el Gobierno comenzó a desembolsar fondos para proyectos sociales bajo el Fondo de Desarrollo Social (FDS), mecanismo creado conjuntamente con un donante extranjero diseñado para mejorar la transparencia de los gastos sociales de conformidad con las normas internacionales de desarrollo. Durante el año hubo irregularidades en el manejo de los fondos. Por ejemplo, se depositaron fondos para proyectos selectos en las supuestas cuentas bancarias de varios ministerios; no obstante, los críticos denunciaron que las cuentas en realidad pertenecían a los ministros que encabezaban esos ministerios, con lo cual los fondos se estaban depositando bajo su directo control personal. Según se informa, un ministro hizo caso omiso de las ofertas de empresas que respondieron a una licitación abierta y seleccionó una empresa propia, si bien ésta no había presentado una oferta; el ministro declaró que su compañía reunía las condiciones para aceptar dinero del FDS de la cuenta que él controlaba.

La ley no preveía el acceso público a la información del Gobierno, y tanto ciudadanos como no ciudadanos, incluidos los medios de difusión extranjeros, en general, no tenían acceso a dicha información. La falta de un sistema de mantenimiento de registros, archivos y bibliotecas públicas también contribuía a limitar el acceso.

Sección 5 Actitud del Gobierno frente a la investigación internacional y no gubernamental de supuestas violaciones de derechos humanos

La ley restringe las actividades de las ONG, y las pocas ONG nacionales existentes de derechos humanos se ocupaban preferentemente de cuestiones relacionadas con el desarrollo que entrañaban derechos económicos y sociales, como atención de salud y de ancianos. Si bien la ley incluye a los derechos humanos entre las áreas en las que las ONG pueden operar, ninguna ONG denunció públicamente casos de abusos de derechos civiles o políticos por el Gobierno o corrupción oficial. En 2008, representantes del Gobierno se reunieron con representantes de ONG nacionales para mejorar la cooperación en los esfuerzos por adherirse a los principios de transparencia de la EITI. Pese a esta creciente cooperación, la actitud del Gobierno hacia las ONG nacionales e internacionales que trabajaban en el país o informaban sobre él siguió siendo generalmente "no amistosa", en opinión de un diplomático extranjero encargado de evaluar la

situación de la sociedad civil en el país. Las restricciones gubernamentales, entre ellas el oneroso requisito de registro y la falta de capacidad para gestionar y facilitar información al público, siguieron entorpeciendo las actividades y el desarrollo de la sociedad civil nacional. Las ONG internacionales de derechos humanos residentes en el país eran poco numerosas y se interesaban, generalmente, por los derechos económicos y sociales, no por los derechos civiles y políticos.

El Gobierno cooperó, en distintos grados, con organizaciones internacionales como el Comité Internacional de la Cruz Roja y las Naciones Unidas. Según funcionarios públicos, se celebraron reuniones durante el año con representantes del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) para tratar la reapertura de una oficina de dicho comité en el país. El CICR había suspendido las visitas en prisión en marzo de 2008 después de que el Gobierno se negó a conceder el acceso a algunos reclusos (véase la sección 1.c.).

Durante el año, el Gobierno rechazó categóricamente el informe de 2008 sobre centros de detención preparado por Manfred Novak, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Tortura. Novak afirmó que los ejemplos de tortura en el país parecían reflejar un método de tortura sancionado por el Estado para obtener pruebas y confesiones, y una cultura de impunidad total que permitía que continuara la práctica incontrolada de la tortura (véase la sección 1.c.). Señaló asimismo que las actas judiciales no registraban ni una sola condena por tortura y que algunos funcionarios conocidos por practicar la tortura seguían avanzando en su carrera en las fuerzas de seguridad. También citó "la disfunción de la administración de justicia y, por tanto, la ausencia del estado de derecho". Nowak recomendó que el Gobierno emprenda una "reforma integral" de sus leyes, régimen penal e instituciones judiciales y policiales. También recomendó que el Gobierno establezca mecanismos eficaces de supervisión y rendición de cuentas que puedan ayudar a luchar contra la tortura, y que los diplomáticos extranjeros en Malabo efectúen visitas de observación, con carácter regular, a los centros de detención. Los funcionarios de las Naciones Unidas también recomendaron que la comunidad internacional, incluidas las empresas transnacionales, garanticen que en sus prácticas de cooperación al desarrollo y sus actividades comerciales no sean cómplices de las violaciones de los derechos humanos.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), principal organización con cierta responsabilidad en el sector de derechos humanos, dependía del Gobierno, que a su vez ejercía una fuerte influencia sobre ella, y estaba sujeta a graves limitaciones financieras, institucionales y de personal. No investigaba denuncias de violaciones de derechos humanos ni mantenía estadísticas sobre ellas. El Presidente nombraba a los miembros de la CNDH.

El comité parlamentario de quejas y peticiones ofreció un foro al público para airear preocupaciones, y su actividad fue en aumento en el curso del año. El comité aceptó denuncias y peticiones siempre que el parlamento estaba en sesión.

Sección 6. La discriminación, los abusos sociales y la trata de seres humanos

La Constitución y las leyes prohíben la discriminación por motivo de raza, sexo, religión, discapacidad, idioma o condición social; no obstante, el Gobierno no aplicó estas disposiciones con eficacia. Pese a ello, se realizaron numerosos esfuerzos de divulgación para concienciar al público sobre cuestiones relacionadas con la discriminación y la violencia contra la mujer y los

niños, la discriminación de las minorías étnicas y la discriminación de los afectados por el VIH/SIDA.

La mujer

La violación es ilegal, pero la violación conyugal no está contemplada en la legislación. El Gobierno no aplicaba la ley con eficacia. La denuncia de violación se consideraba un oprobio para la familia afectada. Durante el año se llevaron varios casos a los tribunales, pero se ignora su número exacto.

La violencia en el hogar era un problema. La violencia contra la mujer, incluidos los malos tratos por el cónyuge, es ilegal, pero el Gobierno no aplicaba la ley con eficacia. Los órganos policiales y judiciales se mostraban reacios a tramitar casos de violencia en el hogar. El Gobierno, conjuntamente con organizaciones internacionales, llevó a cabo campañas de concienciación pública sobre los derechos de la mujer y la violencia en el hogar.

La prostitución es ilegal, y el Gobierno continuó aplicando la legislación contra empresas y proxenetas. No obstante, la prostitución callejera era evidente en las dos ciudades principales de Malabo y Bata. Por orden de los Ministerios del Interior y de Seguridad Nacional, la policía efectuó redadas en los lugares de prostitución durante el año.

El acoso sexual es ilegal; su magnitud se desconoce. No se tienen informes de casos presentados a los tribunales.

El Gobierno no interfería con los derechos básicos de las parejas y las personas de decidir libre y responsablemente cuántos hijos tener, con qué espaciamiento entre ellos y cuándo tenerlos, y de contar con la información y los medios para hacerlo exentos de discriminación, coacción y violencia. A las mujeres se las diagnosticaba y trataba igualmente por infecciones de transmisión sexual, incluso VIH.

La ley prevé la igualdad de derechos del hombre y la mujer, incluidos los derechos con arreglo a la ley de familia, la ley de la propiedad, y en el régimen judicial; no obstante, los derechos de la mujer estaban limitados en la práctica. Según el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, la preponderancia de estereotipos negativos y las "adversas normas culturales, costumbres y tradiciones profundamente arraigadas, incluidos los matrimonios forzosos y en edad temprana, y el matrimonio levirático (práctica por la cual puede exigirse que un hombre se tenga que casar con la viuda de su hermano) discriminaban contra la mujer. La falta de una legislación que regule los matrimonios tradicionales y otros aspectos del derecho de familia también discriminaba contra la mujer, especialmente con respecto a la poliginia, la herencia y la custodia de menores.

En las zonas rurales, las mujeres estaban relegadas principalmente, por la costumbre, a desempeñar papeles tradicionales. En los medios urbanos, las mujeres con los mismos títulos y méritos que los hombres rara vez eran objeto de discriminación flagrante. No obstante, perduraba en el país una cultura conservadora en la que persistían los prejuicios sociales contra la mujer.

Las mujeres a veces eran víctimas de la discriminación en lo referente a obtención de empleo, crédito y remuneración igual por trabajo de igual valor.

Durante el año, el Gobierno proporcionó cursos, seminarios, conferencias y programas de los medios de difusión para concienciar a la población y los organismos estatales en cuanto a las necesidades y derechos de la mujer. Por ejemplo, el 15 de febrero, el Ministerio de Asuntos Sociales y Promoción de la Mujer impartió un seminario para miembros del poder judicial sobre las prácticas que infringen los derechos de la mujer, incluidos el maltrato físico, los matrimonios forzados y leviráticos, y el uso de la dote. El 15 de mayo, el Ministerio celebró una conferencia similar para miembros del Parlamento, y en noviembre celebró un seminario sobre los derechos de la mujer para los 68 miembros del poder ejecutivo.

Como parte de su programa de apoyo a la sociedad civil, un fondo extranjero de desarrollo dedicó uno de sus foros a los derechos de la mujer. Los temas predominantes fueron la poliginia y las actitudes tradicionales de discriminación contra la mujer.

Menores

La ciudadanía se obtiene de los padres. Estos tienen la responsabilidad de inscribir a sus hijos y, si no lo hacen, se les puede denegar el acceso a los servicios públicos.

La enseñanza era gratuita y obligatoria hasta los 13 años. La gran mayoría de los niños estaba escolarizada, al menos en la enseñanza primaria. Las familias esperaban generalmente de los hijos varones que cursaran los siete años adicionales de enseñanza secundaria o terminasen un programa de formación profesional después de la enseñanza primaria. En cambio, en el caso de las niñas de medios rurales, el embarazo precoz o la necesidad de ayudar en el hogar, limitaban sus oportunidades de educación y, en general, el nivel de educación de las mujeres era inferior al de los hombres. Durante el año, el Gobierno se asoció con una compañía de petróleo extranjera para llevar a cabo un programa de renovación de las escuelas, por valor de varios millones de dólares, y continuó trabajando con un país extranjero para reformar material anticuado de los programas de estudio.

Maltratar a los menores es ilegal; no obstante el Gobierno no aplicó la ley con eficacia y se dieron casos de malos tratos a menores. Los castigos físicos eran el método tradicional aceptado de disciplina. Durante el año, se llevó ante los tribunales un reducido número de casos de malos tratos a menores.

La ley no prevé la prostitución infantil ni la pornografía infantil. No había mucha evidencia de que los niños se prostituyeran para sobrevivir sin la intervención de terceros. La edad mínima para el consentimiento sexual son los 18 años.

La trata de seres humanos

La trata de seres humanos está legalmente prohibida; no obstante, se sospechaba que el país era tanto destino como tránsito de sus víctimas. No existían cifras fiables sobre el número de víctimas de la trata de seres humanos. El país ha sido principalmente un punto de destino de

niños víctimas de la trata con fines de trabajo forzoso y posiblemente de explotación sexual. Se creía que había trata de niños de países cercanos, principalmente Nigeria, Benín, Camerún y Gabón con fines de servidumbre doméstica, trabajo en mercados, venta ambulante y demás formas de trabajo forzoso, como transportar agua y lavar ropa. Se creía que la mayoría de las víctimas de la trata eran enviadas a Malabo y Bata, donde una pujante industria petrolífera creó una demanda de explotación comercial y laboral. Es posible que también haya habido trata de mujeres que eran ingresadas al país desde Camerún, Benín, otros países vecinos y la China con fines de explotación sexual o laboral. En el último año se denunció que mujeres de origen ecuatoguineano también eran enviadas a Islandia con fines de explotación sexual comercial.

En el pasado, los traficantes solían cruzar la frontera con documentación falsa y los niños afirmaban, fraudulentamente, ser sus hijos. No obstante, la desaparición de los incentivos económicos de esta actividad aparentemente redujo la trata a un reducido número de casos.

Las sanciones por la trata de seres humanos con fines de explotación sexual o de otro tipo oscilan entre 10 y 15 años de prisión y una multa de no menos de, aproximadamente, 50 millones de francos CFA (US\$109.000).

Cuando las embajadas de víctimas identificadas de la trata presionaron al Gobierno, éste cooperó con otros Gobiernos, organizaciones internacionales y ONG para ayudar a las víctimas y asistir en su repatriación. No obstante, las misiones diplomáticas extranjeras confirmaron que muchos de sus ciudadanos eran embarcados fuera del país antes de que las embajadas se enteraran del problema.

El Ministerio de Justicia tiene la responsabilidad de combatir la trata de personas, y el Ministro de Justicia era presidente de la comisión interinstitucional de la trata ilegal de inmigrantes y la trata de personas. El Ministerio de Asuntos Sociales y Promoción de la Mujer se encarga de abordar los asuntos relacionados con la protección de las víctimas de la trata de mujeres.

El Gobierno prestó asistencia limitada a las víctimas o los testigos. Durante una visita al país del 2 al 6 de febrero, un consultor de la Organización Internacional de Migración observó que no había refugios para albergar temporalmente a las víctimas de la trata de personas u otras poblaciones vulnerables. El Gobierno por lo general pedía a las embajadas de los países de origen de las víctimas hacerse cargo de éstas hasta su devolución a sus países respectivos. No obstante, el Gobierno no había establecido un procedimiento para notificar siquiera a las embajadas si uno de sus ciudadanos había sido identificado como víctima de la trata de personas. Había pocas ONG en el país que asistieran a las víctimas.

El Gobierno, mediante el Plan de Acción Nacional para Combatir la Trata de Seres Humanos y el Trabajo de Menores, siguió financiando un programa para educar al público contra estas prácticas, prestar asistencia a las víctimas y castigar a los delincuentes.

Durante el año, el Gobierno siguió proporcionando capacitación en medidas antitrata a las fuerzas de seguridad; más de 800 oficiales de seguridad han recibido dicha capacitación desde 2007.

El informe anual del Departamento de Estado *Trafficking in Persons Report* se puede consultar en <http://www.state.gov/g/tip>.

Personas con discapacidad

La legislación no prevé la protección de las personas con discapacidad contra la discriminación en el empleo, la educación o la prestación de otros servicios estatales, ni ordena que se les facilite el acceso a los edificios.

Los servicios de educación para las personas discapacitadas mental o físicamente eran limitados. La Cruz Roja local, con apoyo financiero del Gobierno, regentaba una escuela en el país para niños sordos. El Gobierno y la Iglesia católica trabajaban juntos para prodigar cuidados a discapacitados mentales en la institución Virgen Madre María África.

Los Ministerios de Educación y Salud son los principales encargados de proteger los derechos de las personas con discapacidad. Se siguieron transmitiendo anuncios públicos sobre los derechos de las personas con discapacidad.

Minorías nacionales, raciales y étnicas

La discriminación de las minorías raciales o étnicas era ilegal; no obstante, existía el problema de la discriminación social, el acoso por las fuerzas de seguridad y la marginalización política de las minorías. A menudo, los extranjeros eran discriminados. El número de residentes ilegales de Nigeria, Ghana, Camerún, Malí, Togo, Gabón y de otros países africanos representaba una parte importante de la fuerza laboral y seguía creciendo, pese a los intentos de la policía de aplicar las leyes de inmigración. Los trabajadores extranjeros de África occidental y otros lugares se sentían atraídos al país por su creciente economía petrolera.

Abusos y discriminaciones sociales, y actos de violencia provocados por la orientación sexual y la identidad sexual

La estigmatización y discriminación social de los homosexuales era un problema grave, que el Gobierno hizo escasos esfuerzos por combatir.

Otros casos de discriminación y violencia social

Pese a las frecuentes declaraciones públicas y campañas de radio en las que se abogaba por la no discriminación contra ellas, las personas con VIH/SIDA continuaron siendo víctimas de la estigmatización social, lo que las obligó a ocultar su enfermedad. El Gobierno facilitó pruebas de VIH/SIDA y tratamiento gratuitos, y financió campañas para una mayor conciencia pública.

Sección 7. Derechos de los trabajadores

a. El derecho de asociación

La ley prevé el derecho de los trabajadores a establecer sindicatos y afiliarse a los sindicatos de su elección, sin autorización previa ni excesivos requisitos; no obstante, el Gobierno puso obstáculos prácticos a los grupos que deseaban sindicarse. En la mayoría de los casos, quienes deseaban sindicarse fueron atraídos a estructuras existentes del partido, mediante presiones e incentivos. La Organización Sindical de Pequeños Agricultores siguió siendo el único sindicato laboral legal en funcionamiento. Según la Confederación Sindical Internacional, las autoridades continuaron negándose a registrar la Unión Sindical de Trabajadores de Guinea Ecuatorial. La ley establece como requisito para el registro de un sindicato que cuente con un mínimo de 50 miembros de un lugar de trabajo determinado; esta disposición bloqueó efectivamente el establecimiento de sindicatos. Las autoridades se negaron a registrar a Servicios Sindicados Independientes, sindicato del sector público, pese a que satisfacía los requisitos legales.

Los trabajadores rara vez ejercían el derecho a la huelga, en parte por el temor a perder el empleo y a sufrir posibles daños ellos mismos o sus familias. En raras ocasiones, organizaron protestas temporales o huelgas pasivas (trabajo lento y ausencias planeadas).

A diferencia del año anterior, no se denunciaron casos en que las fuerzas de seguridad mataran a huelguistas. No se tomó ninguna medida contra los agentes de policía responsables de matar a dos huelguistas chinos en 2008.

b. El derecho de sindicación y negociación colectiva

La ley autoriza a los sindicatos a realizar actividades sin injerencias, pero el Gobierno no protegió este derecho en la práctica.

La ley dispone que los representantes del Gobierno, empleadores y trabajadores se reúnan semestralmente para examinar y fijar los salarios mínimos; no obstante, la representación de los trabajadores era limitada. Hubo pocos informes de negociaciones colectivas, organizadas por algún grupo; no obstante, el Ministerio de Trabajo a veces intervino para mediar en conflictos laborales. Por ejemplo, los trabajadores despedidos podían apelar al Ministerio, primero mediante su delegado regional; no obstante, no se confiaba mucho en la equidad del sistema. Los ciudadanos tenían derecho a apelar las decisiones del Ministerio de Trabajo ante un comité especial permanente del parlamento, establecido para atender las denuncias de los ciudadanos con respecto a decisiones de cualquier organismo del Gobierno.

Ninguna ley prohíbe la discriminación antisindical, pero tampoco se recibieron informes de que ocurriera.

No existen “zonas francas” de elaboración de exportaciones.

c. Prohibición del trabajo forzoso u obligatorio

La ley prohíbe el trabajo forzoso u obligatorio y la esclavitud, incluso de menores; no obstante, había trata de menores con fines de trabajo forzoso y explotación sexual (véase la sección 6).

d. Prohibición de trabajo de menores y edad mínima para el empleo

La ley prohíbe que los menores de 14 años trabajen y estipula que las personas que hayan sido declaradas culpables de obligar ilegalmente a un menor a trabajar pueden ser castigadas con multas de unos 50.000 a 250.000 francos CFA (de US\$109 a US\$545); no obstante, a veces hubo casos de trabajo de menores. La ley prohíbe que menores trabajen como vendedores callejeros o lavando automóviles; no obstante, ellos realizaban estas actividades. Los menores también trabajaban en los mercados locales y eran sometidos a servidumbre doméstica.

Los agentes del orden a menudo se apostaban en los mercados, donde aplicaban las leyes que prohíben a los menores trabajar allí. Los vendedores que infringían estas leyes eran obligados a cerrar sus puestos, se les cobraban fuertes multas o se los deportaba; pese a ello, no se enjuició a ningún vendedor en el transcurso del año. El Gobierno no proporcionaba servicios sociales a los menores que encontraba trabajando en los mercados.

El Ministerio de Trabajo está encargado de hacer cumplir las leyes sobre el trabajo de menores.

e. Condiciones aceptables de trabajo

La aplicación de la legislación laboral y los acuerdos internacionales de trabajo ratificados no era eficaz, con el resultado de condiciones de trabajo deficientes. Aunque el Gobierno prestó más atención a cuestiones afines durante el año, los códigos de seguridad, por ejemplo, en general no se aplicaron. En cambio, la mayor parte de las compañías de petróleo excedieron las normas internacionales mínimas de seguridad.

El 25 de abril, el Gobierno emitió el Decreto Público 60/2009, que establecía un salario mínimo mensual de 95.400 francos CFA (unos US\$205) para todos los trabajadores del país, incluso los agricultores; no obstante, esto no permitía un nivel de vida decorosa para un trabajador y su familia en Malabo o Bata. En el resto del país, el salario mínimo proporcionaba un ingreso mínimo adecuado. Muchas compañías del sector estructurado pagaban salarios superiores al mínimo, pero muchos trabajadores (por ejemplo, los agricultores) no estaban amparados por la ley del salario mínimo. Por disposición legal, los trabajadores de la industria de hidrocarburos recibían salarios mucho más altos que los establecidos para otros sectores, con las consiguientes disparidades en la sociedad y el aumento de la inflación de algunos bienes y servicios. El Ministerio de Trabajo está encargado de hacer cumplir las leyes sobre salario mínimo.

La ley prescribe un horario laboral de 35 horas a la semana y un período semanal de descanso de 48 horas, requisitos que se observaban generalmente en la práctica en la economía estructurada. Se exceptuaban de estas normas algunos trabajos, como los de la industria del petróleo en plataformas marinas. Era obligatorio el pago de primas por horas extraordinarias de trabajo, pero este requisito no se aplicaba con eficacia.

La ley prevé la protección de los trabajadores contra riesgos ocupacionales, pero el Gobierno no aplicaba esta disposición en forma eficaz. Durante el año, el Gobierno contrató otros 100 inspectores laborales para vigilar a la industria. La ley no otorga a los trabajadores el derecho a apartarse de situaciones que constituyan un riesgo para su vida o su seguridad sin poner en peligro la continuidad de su empleo.